

Salamanca, Guanajuato, a 08 ocho de febrero del 2021 dos mil veintiuno, encontrándose debidamente integrado el expediente **JAM-54/2020**, promovido por **Epifanio XXXXXXX**, por su propio derecho, en los siguientes términos;

RESULTANDO

PRIMERO. Promoción de la demanda. Por escrito presentado ante este Juzgado Administrativo Municipal el 13 trece de agosto de 2020 dos mil veinte, suscrito por quien se indica en el proemio de la presente resolución, impugnando los siguientes actos administrativos:

- I. La boleta de infracción con número de folio **XXXXXX**, la cual le fue notificada el 06 seis de agosto de 2020 dos mil veinte.

- II. La calificación de la boleta de infracción, acredita en la factura original con folio **XXXXXX** de fecha 06 seis de agosto de 2020 dos mil veinte dentro del acto impugnado, en la que se determinó un crédito fiscal por la cantidad de \$ **XXXXXX** pesos 00/100 en Moneda Nacional)

Además, solicito a) La declaración de nulidad de dicho acto, b) El reconocimiento de un derecho para que se deje sin efectos la boleta de infracción y se devuelva la cantidad que tuvo que erogar con motivo de un acto administrativo que a su juicio resulta ilegal, y la abstención a la inscripción de cualquier registro negativo, eliminación o cancelación c) La condena a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de los derechos violentados.

SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2020 dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se requirió a la Dirección de Vialidad y a la Coordinación de Oficiales Calificadores para que en el término de tres días proporcionaran el nombre de los servidores públicos, tanto de quien la realizo como de quien la califico. Para que pudieran ser emplazados legalmente.

Se tuvo por admitidas las pruebas documentales ofrecidas y exhibidas en su escrito inicial de demanda, así como la presuncional legal y humana en todo lo que le favorezca, se le tuvo por señalando autorizados legales y domicilio para recibir notificaciones, además manifestó que no consiente la publicación de sus datos personales.

TERCERO. Contestación de la demanda. Por auto de fecha 09 nueve de noviembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo a la Dirección General de Movilidad y a la Coordinación de Oficiales Calificadores por dando el nombre de los servidores públicos de quien la realizo como de quien califico el acto impugnado. Por lo que se les emplazo legalmente para que dieran contestación de la demanda

En cuanto a Tesorería Municipal, se le tuvo por compareciendo al presente proceso como tercero con un derecho incompatible a la del actor, así como objetando las pruebas que se anexan en el escrito inicial de demanda.

En auto de fecha 18 dieciocho de diciembre de 2020 dos mil veinte se tuvo a el agente vial y oficial calificador, autoridades demandadas, por dando contestación en tiempo y forma. Así como señalando domicilio procesal y nombrando autorizados legales para oír y recibir toda clase de notificaciones. Además se le tuvo por acreditando su personalidad con copia certificada de su nombramiento.

Finalmente, se señaló fecha y hora para el desahogo de audiencia de alegatos.

CUARTO. Audiencia final del proceso. Legalmente citadas las partes, siendo las 10:00 diez horas con cero minutos del 21 veintiuno de enero de 2021 dos mil veintiuno la parte actora presentó por escrito sus alegatos.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Este juzgado Administrativo Municipal con sede en Salamanca, Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente proceso, de conformidad con los artículos 1, fracción II y 263 párrafo primero del Código de Justicia Administrativa de Guanajuato; así como lo previsto por los artículos 241, 243 segundo párrafo, 244 y 246, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Certeza del acto impugnado. La existencia se tiene por acreditado con la copia certificada de la boleta de infracción con número de folio **XXXXXX** –foja 25-, emitida el 06 seis de agosto de 2020 dos mil veinte, misma que se solicitó a la autoridad y da fe de la existencia de la original. Admniculada con la confesión realizada por la autoridad encausada al momento de contestar la demanda en cuanto expreso que era cierto la elaboración de la infracción impugnada. Así mismo el actor acredita su interes con la factura original de pago por concepto de multa en la que el actor, en fecha 06 seis de agosto de 2020 dos mil veinte pago la cantidad de \$ **XXXXXX** pesos 00/100 MN) por concepto de multa.

Esta valoración se fundamenta en los artículos 48 fracción I, 57, 117,118, y 124 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En cuanto a la calificación se tiene por acreditada dentro de la de la factura original **XXXXXXXX** –foja 08- emitida por la autoridad exactora, en la cual se aprecia el pago de la multa que aparejo el acto refutado.

Comprobante fiscal que por sus características en cuanto a sello oficial, firma, membrete del municipio de Salamanca, Guanajuato, el haber sido expedido por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, es un documento público con valor probatorio pleno para acreditar que el ahora actor realizo el pago del acto combatido, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por los artículos 78, 117 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Por lo que la objeción de las pruebas documentales que hace valer el tercero en el presente asunto, con fundamento en el artículo 86 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, no ha lugar pues si bien las documentales hacen prueba plena de su existencia.

TERCERO. Las causales de improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y, por tanto, de estudio oficioso y preferente.

En esa tesitura se analizará la que hacen valer las autoridades demandadas, quien en síntesis expresa lo siguiente:

“...Opongo la excepción de falta de agravio personal y directo en la esfera jurídica del demandante...”

En cuanto al señalamiento que hace la autoridad respecto de la legalidad de su actuación y su percepción acerca de que por ello este proceso es improcedente, debe señalarse que la materia de controversia en este caso es precisamente la definición de la legalidad del acto combatido, razón por la que no puede traducirse en una causa de improcedencia o de sobreseimiento establecidas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues sus consideraciones se refieren a la legalidad del acto impugnado.

Dado lo anterior, debe desestimarse el planteamiento en cuestión, tal y como lo advierte la jurisprudencia número P./J. 135/2001, que dicta:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse”.¹

¹Tesis P./J. 135/2001, jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV de enero de 2002, página 5.

Dicho de otro modo, las alegaciones de la autoridad se refieren al estudio de la cuestión de fondo del asunto, razón por la que sus planteamientos no constituyen una de las causas antes señaladas y, por ende, es preciso desestimar su estudio en este apartado.

Por lo anteriormente expuesto y al no actualizarse alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 261, en relación con el 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios del Guanajuato, **NO SE SOBREESE EL PRESENTE PROCESO ADMINISTRATIVO.** }

En esa tesitura se analizará la que hacen valer la autoridad demandada, quien en síntesis expresaron lo siguiente:

“...opongo la excepción de falta de agravio personal y directo en la esfera jurídica del demandante...”

En cuanto a la falta de interés jurídico del actor lo expuesto por la autoridad demandada y el tercero en el proceso resulta infundado atento a las siguientes consideraciones.

Del folio de infracción **XXXXXXX** se desprende que el agente vial en el rubro del conductor asentó de manera literal al igual que en la factura de pago viene dirigido “Epifanio **XXXXXXXXXX**” (sic), por lo tanto, el acto administrativo se dirige de manera literal a la parte actora.

Ante tal indeterminación del sujeto al cual se dirige el acto impugnado, la autoridad abrió la posibilidad de que se sintiera afectado en su esfera jurídica con el acto de autoridad y, por lo tanto, acudir ante este órgano de control jurisdiccional a demandar su nulidad.

Entonces sí, Epifanio **XXXXXXXXXX**, acude a promover el presente proceso como afectada por la imposición de la boleta de infracción y ejecutor del pago de la multa, teniendo en su poder el documento original en que obra el recibo de pago de la multa que acarreó la infracción multicitada, su interés jurídico lo acredita con la documental pública consistente en factura **XXXXXXXXXX** visible en -foja 08-, al estar dirigida a nombre de la parte actora, pues se desprende que la justiciable, en fecha 06 seis de agosto de 2020 dos mil veinte, pagó la

cantidad de \$ **XXXXXXX** pesos 00/100 en Moneda Nacional), crédito fiscal emanado del folio de infracción refutado.

Esta valoración se fundamenta en los artículos 117, 121 y 131 del *Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato*.

Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis aislada, que se aplica por analogía y que fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y que a la letra establece:

<<INTERES JURIDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad **debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio**, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia.>>

Por otro lado, en cuanto al señalamiento que hace el tercero con un derecho incompatible al del actor, respecto de la legalidad de su actuación y su percepción acerca de que por ello este proceso es improcedente, debe señalarse que la materia de controversia en este caso es precisamente la definición de la legalidad del acto combatido, razón por la que no puede traducirse en una causa de improcedencia o de sobreseimiento establecidas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues sus consideraciones se refieren a la legalidad del acto impugnado.

Dado lo anterior, debe desestimarse el planteamiento en cuestión, tal y como lo advierte la jurisprudencia número P./J. 135/2001, que dicta:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una

argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse”²

Dicho de otro modo, las alegaciones de la autoridad se refieren al estudio de la cuestión de fondo del asunto, razón por la que sus planteamientos no constituyen una de las causas antes señaladas y, por ende, es preciso desestimar su estudio en este apartado.

Por lo anteriormente expuesto y al no actualizarse alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 261, en relación con el 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios del Guanajuato, **NO SE SOBRESEE EL PRESENTE PROCESO ADMINISTRATIVO.**

CUARTO. Se precisa a las partes que no se transcribirán íntegramente el concepto de impugnación expuesto por el accionante, ni los argumentos esgrimidos por la autoridad demandada. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a. /J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXXI, de mayo de 2010 dos mil diez, consultable a página 830, que es del tenor literal siguiente:

«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente

² Tesis P./J. 135/2001, jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV de enero de 2002, página 5.

planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer».

QUINTO. En el concepto de impugnación donde se señala por la parte actora la competencia de la autoridad demandada cabe a bien señalar la siguiente jurisprudencia número XVI.1º.A.T.J/11, sustentada Por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXIX, de junio de 2009 dos mil nueve, consultable a página 878, que es del tenor literal siguiente:

<<COMPETENCIA. LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA SENTENCIA, ES INDICATIVO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONSIDERÓ OFICIOSAMENTE QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA ES COMPETENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL OCHO).El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, al analizar de oficio la competencia de la autoridad demandada, no se encuentra obligado a realizar un pronunciamiento expreso en la sentencia, cuando considera que la autoridad es competente, pues si bien, de conformidad con el artículo 302, fracción I y último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el juzgador podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la falta de competencia de la autoridad para dictar el acto impugnado y la ausencia total de fundamentación o motivación en éste, ello no significa que el órgano jurisdiccional se encuentre facultado discrecionalmente para examinar ese tema cuando lo considere conveniente, pues la connotación sobre la importancia del aspecto de la "competencia" que se reconoce de ese estudio, orientan la conclusión de que el uso que le procuró el legislador al incluir el verbo "podrá", no es para identificar una facultad potestativa, sino una obligación para el resolutor de que siempre y en todos los casos se pondere la competencia de la autoridad que emite el acto o instruye el procedimiento porque es un aspecto que interesa a la comunidad. De ahí que, en el supuesto de que el citado tribunal, al analizar oficiosamente la competencia de la autoridad administrativa considere que es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada; empero, si estima que es competente, no se encuentra obligado a plasmar esa consideración en la sentencia que

emita, pues esa falta de pronunciamiento es indicativo de que el juzgador asumió que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad, lo que se corrobora con la circunstancia de que continuó con el análisis de la procedencia del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la controversia. >>

Quien resuelve considera **fundado** el **único** concepto de impugnación en donde la parte actora argumenta que el folio de infracción **XXXXX**, se emitió sin contener una debida fundamentación y motivación de conformidad con los siguientes razonamientos jurídico:

El artículo 137, fracción VI del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipio de Guanajuato, señala como elementos de validez del acto administrativo, la debida fundamentación y motivación.

En ese orden de ideas, tratándose de una boleta de infracción en materia de vialidad, la fundamentación debe traducirse en el señalamiento preciso de los preceptos legales aplicables al caso, mientras que, por motivar, debe entenderse como el señalamiento preciso y detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el razonamiento jurídico donde se explique por qué esos hechos actualizan la hipótesis contenida en el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Salamanca, Guanajuato.

Sirve de sustento al argumento vertido supralíneas, la siguiente Jurisprudencia, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, página 622, Tesis No. VI. 2º. J/31, que a la letra dice:

<<FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. >

En la especie, la autoridad demandada asentó dentro del acto impugnado el fundamento y motivo limitándose a señalar con una marca en pluma negra en la parte impresa siguiente:

“MOTIVO DE LA INFRACCION”

Falta de verificación vehicular”

Citando como fundamento legal de la falta administrativa imputada el artículo 70, fracción II Y artículo 71, del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Salamanca, Guanajuato que a la letra dice:

“ Requisitos para circular Artículo 70.- Los vehículos para circular o hacer uso de la vía pública dentro del Municipio deberán satisfacer los siguientes requisitos:

II. Calcomanía de verificación del periodo correspondiente. “

“Artículo 71.- Los propietarios de vehículos están obligados a presentarlos para su revisión mecánica y emisión de humos, ante los centros de verificación autorizados por el municipio. “

Lo anterior, si bien es cierto que señalo con un “X” como fundamento el artículo 70fracción II Y ARTÍCULO 71 del Reglamento de Vialidad del Municipio de Salamanca, Guanajuato, los cuales establecen que como requisito se debe tener la calcomanía de verificación actualizada y los ciudadanos deben acudir a los centros para realizar dicha verificación. Por lo anterior el agente vial en el apartado de “Circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan la infracción”, hace la descripción siguiente: “Siendo las 10:43 horas Encontrándome en mi servicio de la (ilegible) arribo el ciudadano de manera voluntaria solicitando su folio de Infracción Epifanio XXXXXX(sic)

Sin embargo el agente vial no señala el procedimiento que realizo para poder imponerle la multa. Si bien en el acto se encuentra el artículo 15 del Reglamento de Vialidad para el municipio de salamanca, el cual nos menciona el procedimiento que se debe realizar para poder realizar una infracción. Lo que en el caso no quedo acreditado con la motivación pues la autoridad demandada no menciona su procedimiento. Señala “que de manera voluntaria” sin embargo, tampoco se acredita que el hoy actor de manera voluntaria solicitara su infracción, pues si bien, hoy se encuentra tratando de impugnar dicho acto. Se transcribe el artículo 15 del mencionado reglamento:

“Del procedimiento de infracción

Artículo 15.- *En el caso de que los conductores contravengan alguna de las disposiciones de este Reglamento, el personal operativo de la Dirección, deberá proceder en la forma siguiente:*

I. *Indicar al conductor, en forma clara y evidente, utilizando el silbato, autoparlante manual, o verbalmente que debe interrumpir la marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar donde no obstaculice el tránsito;*

II. *Abordará al infractor, mostrando su identificación laboral, y haciéndole saber al conductor la infracción que ha cometido, de conformidad al reglamento vigente;*

III. *Solicitará respetuosamente al conductor que muestre su licencia de conducir, tarjeta de circulación, y en su caso, carta porte tratándose de vehículos de transporte pesado o con material peligroso; y,*

IV. *Una vez mostrados los documentos, levantará la boleta de infracción y entregará al infractor el ejemplar o ejemplares que corresponda.*

Desde la identificación, hasta el levantamiento del acta de infracción, se deberá proceder sin interrupción. “

Así pues de lo transcrito por el agente vial no se demuestra que siguiera el procedimiento de infracción. Además de no señalar de manera pormenorizada los hechos que se suscitaron. Pues si bien en el artículo anterior señala que se debe detener la marcha del vehículo, lo que en el presente asunto no sucedió. Así como señalar también, cual fue el operativo que se estaba realizando, su motivación y fundamentación. Tal y como se señala en el artículo 23 del Reglamento de Vialidad del Municipio de Salamanca, que a la letra dice:

“De los operativos de vialidad Artículo 23.- *El personal operativo de la Dirección tendrá la facultad de realizar operativos de vialidad relacionados con la verificación vehicular, cinturón de seguridad, ciclista seguro, motociclista seguro y control de velocidad, mismos que se llevarán a cabo para el control y prevención al conducir vehículos automotores que no cumplan los requisitos necesarios de seguridad, o de la verificación correspondiente, estableciendo un operativo permanente en puntos de revisión que determinará discrecionalmente la Dirección, en los diferentes sitios de la ciudad, determinando de manera aleatoria a los conductores que se les requerirá el cumplimiento de las medidas de seguridad o verificación vigente, con un sentido preventivo y disuasivo, buscando salvaguardar la integridad física y bienes del conductor, terceras personas y de la comunidad en general, se llevarán a cabo dichos operativos. “*

Lo que en el presente asunto no sucedió. Pues si bien el agente no señala si se encontraba realizando algún operativo, y que tipo de operativo realizaba, además de poner la fundamentación aplicable al caso. Pues si bien en la boleta impresa se encuentra señalado la fundamentación para verificación vehicular exceptuando para ello el artículo 23 de dicho reglamento. Mismo que se encuentra en la boleta impresa en el apartado de “control de velocidad” sin embargo se habla de dos situaciones diferentes y de diferentes tipos de “operativos de vialidad”.

En efecto, correspondía a la demandada indicar mediante un relato pormenorizado de cómo ocurrieron los hechos, para acreditar en el texto mismo del acto controvertido, cómo se percató que el hoy actor cometió la supuesta infracción al Reglamento de Vialidad para el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Lo anterior de conformidad al criterio Jurisprudencial sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, y que es del tenor literal siguiente:

«FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.» (Octava Época, Registro: 216534, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 64, Abril de 1993, Materia(s): Administrativa, Tesis: VI. 2o. J/248, Página: 43.).

En estos términos, para que la motivación sea suficiente y congruente, es necesario que en el propio cuerpo de la infracción se señalen en forma completa, las razones que sustenten su dicho y de las que pueda acreditarse la comisión de la totalidad de conductas imputadas. Se concluye por ello, que la motivación empleada, resulta insuficiente.

Por todo lo anterior, para efecto de que pudiera subsistir la presunción de legalidad de la que se encuentran investidos los actos administrativos, resulta necesario que la autoridad sujete su actuar a las formalidades contenidas en el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; para el presente asunto, particularmente haber motivado en forma suficiente, la totalidad de las circunstancias que acreditaran fehacientemente la comisión de las conductas imputadas.

A mayor abundamiento, cabe puntualizar que la fundamentación y motivación de la boleta de infracción debe contener, como se esclareció supralíneas, los siguientes elementos: a) preceptos legales aplicables; b) relato pormenorizado de los hechos, incluyendo elementos temporales, espaciales y circunstanciales; y, c) argumentación lógica jurídica que explique con claridad la razón por la cual los preceptos de ley tienen aplicación al caso concreto.

Lo anterior así se sostiene, pues limitarse a realizar las anotaciones como las que invoco la autoridad, sin una debida fundamentación y motivación, puede dar como resultado que un agente vial arbitrariamente elabore infracciones imponerle la carga de efectuar un pago injustamente habría tenido que soportar, así como imputarle cualquier conducta sin detallar el sustento jurídico en que soporte su decisión.

No es óbice para arribar a esta conclusión el hecho de que la autoridad demandada al momento de su contestación en lo medular negó que la boleta de infracción **XXXXXX** se encontrara indebidamente fundada y motivada; y refiere que existe una contradicción entre lo señalado por el actor y el material probatorio, a su juicio existen elementos tendientes a evidenciar la legalidad de la conducta reprochada y que la negación lisa y llana hecha por el recurrente debe considerarse como calificada.

El argumento sostenido por la autoridad en cuanto a que nos encontramos en presencia de una negación que envuelve una afirmación **es infundado** atento a lo siguiente:

a) El artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que los actos administrativos se presumirán legales, sin embargo, las autoridades administrativas deberán probar los hechos en que los motiven cuando **el interesado los niegue lisa y llanamente**, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.

b) Dentro del escrito de demanda <<foja 05>> capítulo de conceptos de impugnación, el justiciable de una forma clara y sin cortapisas negó lisa y llanamente, por lo que, la presunción de legalidad del acto deja de operar revirtiendo a de esta manera a la demandada la carga de la prueba a fin de demostrar la existencia de los hechos y, por tanto, **la legalidad del acto administrativo**, situación que dentro del presente proceso no se acredita, pues del análisis de la boleta de infracción **XXXXX** resulta indebidamente fundada y motivada atento a los argumentos antes expuestos en esta resolución.

Es importante señalar que dentro del presente proceso administrativo se ventila sobre la legalidad o ilegalidad del folio de infracción **XXXXX**, de esta manera, por regla general le corresponde a la autoridad emisora del acto impugnado acreditar que el mismo cumplía con todos los elementos y requisitos de validez regulados por los artículos 137 y 138 Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Bajo ese contexto, la omisión o irregularidad de alguno de los elementos de validez trae como sanción la nulidad del acto administrativo, mismo que no podrá ser remplazado por otro, tampoco subsanarse y por tanto, el impetrante no tiene la obligación de cumplirlo.

En consecuencia, las agravios esgrimidos por el actor resultan fundados referente a la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, en atención a que es en el propio acto donde de forma completa deban señalarse el ordenamiento legal aplicable y las razones y circunstancias pormenorizadas bajo las cuales se cometió una falta administrativa, lo anterior con fundamento en la fracción VI del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Como apoyo de lo anterior, se hace propio, el criterio que sostiene la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, contenida en la página 119 ciento diecinueve, de la publicación intitulada "Criterios 2000-2008" del referido Tribunal, la cual es del tenor siguiente:

"INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- PROCEDE DECRETAR LA NULIDAD LISA Y LLANA.- La ausencia de fundamentación y motivación deriva en el decretamiento de una nulidad para el efecto de que se emita otro acto debidamente Fundado y motivado. Por su parte la indebida satisfacción de estos extremos, conduce a decretar una nulidad lisa y llana, ya que aquí el particular no requiere conocer los fundamentos y motivos de la afectación, sino que es sabedor de que los aplicados en el acto en concreto no son los adecuados.³"

En las relatadas circunstancias, es de concluirse que del contenido del acto combatido no se advierten elementos suficientes que demuestren que el hoy actor haya infringido algún ordenamiento legal.

Lo anterior encuentra sustento legal en la siguiente tesis:

"TRANSITO, MULTAS DE. Una infracción y una multa impuestas por el agente de tránsito como parte, testigo y Juez, en cuya acta se limita a asentar escuetamente "pasar alto con señal de semáforo", carece de motivación en realidad, pues por una parte no explica en forma clara y completa las circunstancias de la infracción y, por otra, sería una denegación de justicia y una renuncia al debido proceso legal, contra el texto de los artículos 14 y 16 constitucionales, obligar a un particular a pagar sin más una multa cuya motivación no es clara y en la que, como se dijo, el agente fue parte, testigo y Juez, sin que su dicho admita prueba eficaz y real (no simplemente teórica) en contrario.⁴"

Por las consideraciones vertidas, con fundamento en los artículos 143 párrafo primero, 300 fracción II y 302 fracciones II y IV, del multicitado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo procedente decretar la **NULIDAD TOTAL** del acto impugnado consistente en boleta de infracción **XXXXXX**,

³(Exp. 4.509/02. Sentencia de fecha 09 nueve de mayo de 2003. Actor: Martha Isabel Espriu Manrique)

⁴Tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 121-126, Sexta Parte, página 233. Con registro número 252071

elaborada por Guadalupe **XXXXXX** agente vial, adscrito a la Dirección de Vialidad de Salamanca, Guanajuato.

En ese sentido y en vía de consecuencia jurídica, al tenor del principio del derecho que reza *Accesorium sequitur principali* -lo accesorio sigue la suerte de lo principal-, resulta procedente decretar también la **NULIDAD TOTAL** de la calificación de la infracción.

Esta determinación se sustenta en el artículo 300 fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 121-126 sexta parte; pagina 280, Séptima Época, con registro número 252103, que esta establece:

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.” - -

SEXTO. Dentro del escrito inicial de demanda el ahora actor solicito como reconocimiento de derecho lo siguiente:

- a)** el reconocimiento de derecho para que le sea devuelta la cantidad de **\$XXXXX pesos 00/100 en moneda nacional**), misma que erogó por concepto de la multa que aparejó el acto impugnado.
- b)** el derecho para que la autoridad se abstenga de hacer cualquier tipo de registro de carácter negativo o perjudicial, o bien si ya se realizó se proceda a su cancelación dentro del libro de sanciones administrativas del municipio de Salamanca, Guanajuato.

En cuanto al inciso a) el actor acreditó el pago de la multa aportando al sumario ejemplar original consistente en comprobante fiscal con referencia **XXXXXX** de fecha 06 seis de agosto de 2020 dos mil veinte, documento que se le concede valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 78, 117 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, creando convicción en esta juzgadora respecto a que tal pago corresponden al mismo acto administrativo

que ha quedado anulado y por ende constituye ahora, producto de un acto viciado que el accionante injustamente se vio obligado a resentir.

Por lo que respecta a la no inscripción y/o cancelación de los antecedentes administrativos, **ha lugar al reconocimiento** del derecho, en atención a los siguientes argumentos:

Toda actuación policial se asienta en documentos oficiales para su debido registro en las plataformas destinado para ellos, tal y como se desprende del artículo 40, fracción IX de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y lo correlativo al numeral 85 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, que a la letra establecen:

De la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

<< **Artículo 40.-** Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones

XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables.

De la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato.

Colaboración en materia de registro de antecedentes de +tránsito

Artículo 85. Con la finalidad de contar con información oportuna y suficiente para prevenir accidentes de tránsito, así como para detectar a los infractores reincidentes, la Policía Estatal de Caminos, y los municipios, se apoyarán en el registro estatal de antecedentes de tránsito...>>

Por ende, una vez que ha quedado anulada la boleta de infracción y el total de su contenido, SE RECONOCE EL DERECHO DE LA PARTE ACTORA, a que la autoridad demandada se abstenga de realizar o colaborar en la inscripción de antecedentes de tránsito y en el supuesto de haberse inscrito la sanción materia del presente juicio, PROCEDA A SU CANCELACION

TODA VEZ QUE HA QUEDADO ANULADA CON MOTIVO DE LA PRESENTE SENTENCIA.

En esa tesitura y derivado de los argumentos esgrimidos por esta juzgadora, **se condena a la autoridad demandada (agente vial)** a realizar las gestiones necesarias a fin de que realice al actor, la eliminación o cancelación de cualquier carácter negativo y la abstención de realizar cualquier cobro por concepto de multa, lo anterior con la finalidad de no imponer cargas al actor para el cumplimiento de la presente sentencia.

Debiendo adoptar la autoridad demanda todas las medidas que sean necesarias para el pleno restablecimiento del derecho reconocido, pudiendo auxiliarse de otras autoridades para el cabal cumplimiento de esta sentencia. Si bien se tuvo a el agente vial, por no contestando en tiempo y forma. Sin embargo no lo exime de su obligación para dar cabal cumplimiento a la presente sentencia

En base a lo antes expuesto, la autoridad deberá informar sobre el cumplimiento otorgado al presente considerando, ***en un término de cinco días hábiles*** contados a partir de aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Este Juzgado Administrativo Municipal resulto competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, atento a lo dispuesto por el considerando primero de esta sentencia.

SEGUNDO. Se declara la **NULIDAD TOTAL** de la boleta de infracción **XXXXX**, en los términos de lo manifestado en los **CONSIDERANDO QUINTO**.

TERCERO. Ha lugar al **RECONOCIMIENTO DEL DERECHO** de la parte actora, Y **A LA CONDENA** de las pretensiones declaradas procedentes, en los términos manifestados en el **CONSIDERANDO SEXTO.**

NOTIFÍQUESE. En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y dese de baja del Libro de Registro de este órgano de control de legalidad.

Así lo resolvió y firma la Licenciada **Estephania Núñez Diosdado**, encargada de despacho del Juzgado Administrativo Municipal de Salamanca, Guanajuato, quien actúa asistido en forma legal con Secretaria de Estudio y Cuenta, Licenciada **Lesli Haydé Leticia Valadez Dávalos**, quien da fe.